

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Pedro Matamala Souper, abogado, presentó recurso de queja contra los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz, ministra suplente señora Paola Díaz Urtubia y Fiscal Judicial señor Jorge Norambuena Carrillo, quienes, por sentencia de quince de mayo de dos mil veinticuatro, pronunciada en los autos Rol N°664-2024, confirmaron la dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, que declaró inadmisibile la demanda reconvenzional por nulidad de la carta de despido y finiquito deducida por la empresa demandada en la audiencia única a que se refieren los artículos 500 y 501 del Código del Trabajo.

Para la recurrente, la decisión descrita configura una infracción al artículo 76 de la Constitución Política de la República, en relación con su artículo 19 número 3, y a los artículos 10 y 108 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto la judicatura no puede dejar de resolver la acción que dedujo en defensa de sus derechos y legítimos intereses, estimando, que en la forma descrita, omitió ejercer sus facultades, ya que incluso a falta de ley debe decidir el asunto sometido a su competencia, tal como acontece con la demanda que interpuso, cuya naturaleza laboral permite radicar el conocimiento del asunto ante los juzgados especializados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 letras a) y g) del Código del Trabajo, más aun teniendo en cuenta que los hechos que la motivan se generaron estando vigente la vinculación con el actor.

Agrega que el artículo 501 del Estatuto Laboral no exige que la interposición de la demanda que dirige contra el trabajador se deba deducir en forma escrita, por lo que lo hizo verbalmente, puesto que la audiencia a que se refiere dicha norma es la única oportunidad disponible, argumento que vincula con el principio de oralidad contenido en su artículo 425, que no se ha respetado en la decisión que impugna y que por especialidad excluye la regla prevista en el artículo 446, considerando que la celeridad del juicio monitorio exige actuar en la forma como procedió.

En consecuencia, la decisión que declaró inadmisibile la acción, impidiendo su conocimiento y resolución, constituye una grave falta y abuso, que además reprueba porque se vincula estrechamente con la pretensión principal y la estricta observancia a la normativa aplicable, lo que configura una negación al derecho de tutela judicial efectiva y una vulneración a un justo y racional procedimiento.

Por lo anterior, solicita se dé lugar al recurso deducido, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte en su lugar la que indica.

Segundo: Que, para resolver, la judicatura consideró que la presentación de toda demanda requiere, de acuerdo al artículo 446 del Código del Trabajo, que



sea efectuada por escrito, disposición que vincula con el mandato de su artículo 452 inciso cuarto, que exige que la reconvencción cumpla las menciones a que se refiere aquella norma y se tramitará conjuntamente con la demanda principal, agregando que esta actuación es incompatible con la celeridad y concentración del procedimiento monitorio, estando vedado para la demandante contestar la acción dirigida en su contra.

Para la Corte de Apelaciones de Santiago, la presentación de la demanda reconvenccional verbal resulta incompatible con la naturaleza y simplicidad del procedimiento monitorio. Para ello tiene en consideración que su reglamentación no contempla la posibilidad que la requerida interponga tal acción, por cuanto corresponde a un juicio especial, reservado para contiendas cuya cuantía es igual o inferior a quince ingresos mínimos mensuales, que exige determinadas actuaciones administrativas previas y que el artículo 500 del Código del Trabajo señala que la audiencia única sólo tiene por objeto el llamado a conciliación, contestación y prueba. Ante dicha falta de regulación, la resolución apelada para resolver la reconvencción se fundó en normas laborales que reglan tal instituto aplicables al procedimiento ordinario, sin que se cumplieran los requisitos exigidos en los artículos 446 y 452 inciso cuarto del citado código, que determinan que la demanda se debe presentar por escrito, cuya tramitación es conjunta con la pretensión principal, por lo que la reconvencción resulta incongruente con la concentración del referido juicio y porque la legislación tampoco prevé la posibilidad para el demandante principal de contestar la pretensión que se deduzca en su contra.

Por lo anterior, concluyen que la judicatura de primera instancia emitió un pronunciamiento y resolución fundados, observando que la recurrente no comparte los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada y que fueron confirmados en alzada, argumentación que reiteran en el informe evacuado.

Tercero: Que el arbitrio interpuesto se contiene en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias” y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del citado código estatuye: *“El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se*



exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma”.

Cuarto: Que, en consecuencia, para dar lugar a tal arbitrio, es menester que el tribunal dicte una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que, *prima facie*, autoriza la aplicación de una sanción disciplinaria a los recurridos de ser acogido.

Según la doctrina, de esta forma “...se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar su procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico...” (Barahona Avendaño, José Miguel, “El Recurso de Queja. Una Interpretación Funcional”, 1998, p. 40).

En este sentido, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial en la parte dispositiva de la sentencia.

Quinto: Que esta Corte ha ido precisando por la vía jurisprudencial los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave, sosteniendo que se configura, entre otros, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, “Los recursos procesales”, año 2010, p. 387).

Se trata, por tanto, de un recurso extraordinario que procede en los casos descritos, que persigue modificar, enmendar o invalidar un fallo o resoluciones pronunciadas con falta o abuso, destinado a corregir la arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho (Alejandro Romero Seguel, en “Curso de Derecho Procesal Civil”, t. V, año 2021, p. 342).

Sexto: Que, del examen de los antecedentes, se obtienen las siguientes conclusiones:

1.- El 17 de octubre de 2023, don Diego Marmie Jiménez interpuso demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones contra la empresa



HPDM Entretención SpA, impugnando la causal de su desvinculación por necesidades de la empresa, que, por su cuantía, se sometió a las reglas del procedimiento monitorio.

2.- El 10 de noviembre de 2023, se dictó la resolución que acogió la pretensión del actor, que fue notificada a la requerida y oportunamente reclamada por ésta, por lo que las partes fueron citadas a la audiencia única que se celebró el 9 de enero de 2024, contestando la demandada y procediendo, a continuación, a demandar en forma verbal al actor, sosteniendo en forma reconvencional la nulidad de la carta de despido y finiquito, por cuanto, tras el despido, tomó conocimiento de diversos incumplimientos a las obligaciones del contrato suscrito por las partes, configurándose, en su concepto, la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, que no pudo invocarse cuando aquél fue desvinculado, sino una diversa, por necesidades de la empresa, en la que cree concurrente un vicio del consentimiento que afectó la validez de los referidos actos jurídicos, configurándose, de esta forma, un importante perjuicio económico.

3.- Al término de dicha audiencia, se dio lugar a la demanda, por lo que la empresa fue condenada a pagar las sumas que se indican en lo resolutivo, tras declarar que el despido del actor fue injustificado. Respecto de la demanda reconvencional, la desestimó en los términos señalados en el primer párrafo del considerando segundo.

Séptimo: Que, para decidir, se debe tener en consideración que el procedimiento monitorio configura un juicio especial, expedito y concentrado, que fue establecido por la legislación con la finalidad de favorecer al trabajador que cuenta con un antecedente escrito que sirve de fundamento inicial y eficaz a su pretensión, cuando esta no supera los quince ingresos mínimos mensuales, que permite incluso su aceptación inmediata por la judicatura, que puede dictar la correspondiente sentencia condenatoria, resolución en todo caso susceptible de reclamación por la requerida, caso en el que se citará a una audiencia única de conciliación, contestación y prueba, como lo establece el artículo 500 del Código del Trabajo.

Octavo: Que tales limitaciones que aplican al empleador demandado se comprenden cuando se revisa el origen histórico y naturaleza del procedimiento monitorio, que en nada se vincula con el de aplicación general, puesto que, como se indicó, surgió como un mecanismo eficaz de cobro de aquellas prestaciones que se encuentren en títulos contenedores de una acreencia actualmente exigible y que surge “con la vocación de resultar un medio de tutela rápido, a favor de la recuperación de créditos indubitados, en especial cuando los acreedores de los mismos tienen una posición especialmente pasiva...Entonces, instituciones como el procedimiento monitorio contribuyen a un cambio en la tramitación como la hemos



venido entendiendo, puesto que, para determinados supuestos, prácticamente el pago es la única opción viable” (“Proceso Laboral”, Gonzalo Cortez M., Jordi Delgado C. y Diego Palomo V., p. 347).

En un sentido similar, Rafael Pereira, quien, citando a Álvaro Pérez, hace presente que “la gran ventaja del proceso monitorio consiste en constituir un medio insustituible para eliminar el proceso en aquellos supuestos en que no exista un conflicto jurídico, sino simplemente una resistencia injustificada del deudor a cumplir la obligación” (Rafael Pereira L., “El Procedimiento Monitorio Laboral”, p. 9).

Noveno: Que dichas características se plasmaron igualmente en la historia de la Ley N°20.087, en la que se consignó que “Este procedimiento establece, además, un desincentivo adicional a la dilatación del pago por parte de la parte condenada, ya que ésta tendrá derecho a iniciar un juicio en los términos regulares, pero con el antecedente de dos resoluciones -una administrativa y otra judicial- que establecen a priori su obligación de pago, por lo que, para litigar con alguna capacidad de éxito, deberá contar con mayores pruebas que las exhibidas ante el inspector del trabajo y ante el juez en su primera resolución. Si este factor se une al hecho de que se trata de una cuantía relativamente baja -un millón de pesos aproximadamente-, probablemente el camino lógico que prevé la ley sea allanarse y no dilatar el cumplimiento de la sentencia”; y, también, en el mensaje de la Ley N°20.260, en el que se consignó que “En sede judicial se mantiene el elemento esencial y característico de todo procedimiento monitorio, denominado por la doctrina ‘inversión del contradictorio’, consistente en que la sola demanda acompañada de sus antecedentes fundantes habilita al juez para acoger o rechazar las pretensiones, de plano, resolución que puede ser objeto de impugnación por cualquiera de las partes, ante el mismo tribunal, no procediendo ningún otro recurso. Ello, dado que tal impugnación produce el efecto de dar inicio a un juicio declarativo. A fin de dar a este procedimiento la especial celeridad y concentración que deben caracterizarlo, se establece que dicho juicio se tramitará en base a una sola audiencia de contestación y prueba. Finalmente, en materia de notificaciones, se precisan las formas en que deben realizarse estas, tanto por las Inspecciones del Trabajo, como por el Tribunal”.

Décimo: Que el procedimiento monitorio está reglamentado en los artículos 496 a 502 del Código del ramo, advirtiéndose sólo algunas remisiones al de aplicación general, en lo que concierne a los requisitos que debe contener la demanda, la forma en que se procede a su notificación, las menciones de la sentencia y la opción que se entrega al trabajador en el inciso segundo del artículo 498, constatándose que en la audiencia única mencionada, sólo se alude a la contestación que puede comunicar el demandado tras la reclamación que formule



contra la resolución que acoja la pretensión planteada por el actor, por lo que una primera conclusión que se puede obtener de lo expuesto, es que la legislación optó por ofrecer un mecanismo procesal concentrado y autónomo, y que, salvo aquellas excepciones, no acude en forma supletoria a las disposiciones del juicio ordinario.

Undécimo: Que, por lo señalado, se debe colegir que las normas del procedimiento de aplicación general no tienen cabida en el monitorio, por lo que no puede acudir en forma supletoria a su reglamentación para completar el vacío atribuido a una presunta omisión de la legislación y que no es tal, puesto que la laguna que se pretende instalar no existe al tener presente el régimen descrito y el origen de esta clase de juicios que obedece íntegramente al cobro inmediato de sumas que el trabajador exige por desprenderse de determinados títulos indubitados, que en este caso fueron empleados para impugnar la causal de despido invocada por la demandada, por lo que toda pretensión de acudir a preceptos del juicio ordinario, carece de fundamento, razón que permite sostener que la reconvencción planteada no podía ser atendida por la judicatura.

Sin perjuicio de lo dicho, en caso de estimarse que aquéllas lagunas están presentes en la legislación que regla el juicio monitorio, la interpretación de la preceptiva que lo rige, de acuerdo a los principios que lo informan, lleva a la misma determinación si se acude a los de celeridad y concentración, que sólo pueden arrojar la conclusión antes descrita como respuesta coherente con el carácter especial que tiene esta clase de juicios.

Duodécimo: Que, en consecuencia, las únicas tres opciones que la legislación entrega a los intervinientes en la audiencia única se restringen, como se indica en el artículo 500 del Código del Trabajo, a la conciliación, contestación de la demandada y la incorporación de la prueba ofrecida.

Decimotercero: Que, finalmente, al revisar el desarrollo de la audiencia única se advierte presente el contradictorio entre las partes y el respeto a la bilateralidad, puesto que la demandada puede en tal ocasión controvertir los fundamentos de la demanda y los antecedentes que la fundan, y rendir la prueba necesaria para acreditar sus alegaciones, tras lo cual se procederá a dictar sentencia, por lo que tampoco se constata en qué medida el procedimiento de que se trata vulnera la garantía a un juicio racional y justo, considerando la oportunidad entregada a la requerida de ser oída e incorporar los medios de convicción que muevan la decisión judicial hacia sus intereses, por lo que no tiene lugar la alegación que formula en el sentido de que plantear una demanda contra del actor y su posterior rechazo implican una infracción a las disposiciones constitucionales y orgánicas en que sostiene su alegación, por lo que, en definitiva, se debe desestimar la reconvencción que pretende por improcedente de llevarse a cabo en la oportunidad prevista en los



artículos 500 y 501 del Código del Trabajo, como correctamente decidió la judicatura.

Decimocuarto: Que, en consecuencia, se observa que el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- incurrieran en alguna de las conductas que la ley reprueba, susceptible de enmienda a través del ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

Y en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza el recurso de queja** interpuesto por don Pedro Matamala Souper.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº 17.720-2024.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

